

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Rama Judicial del Poder Público

**JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO**

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

**REF:** ACCIÓN DE TUTELA No. 2024-00157  
**Accionante:** ESTEFANY JULIETH SIERRA GARCIA  
**Accionado:** CARCEL DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA EL BUEN PASTOR  
**Vinculado:** JUZGADO 4 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA

Procede el despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda para finiquitar el trámite de la **ACCION DE TUTELA** de la referencia.

**I. ACCIONANTE**

Se trata de **ESTEFANY JULIETH SIERRA GARCIA** quien actúa en defensa de sus derechos.

**II. ACCIONADOS**

Se dirige la presente **ACCION DE TUTELA** contra **CARCEL DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA EL BUEN PASTOR** y como vinculado **JUZGADO 4 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTA**.

**III. DERECHOS FUNDAMENTALES PRESUNTAMENTE VULNERADOS**

Se trata del derecho de **petición, libertad, igualdad y debido proceso**.

**IV. OMISION ENDILGADA AL ACCIONADO**

Manifiesta que fue condenada a 53 meses y 15 días de prisión por el delito de concierto para delinquir y se encuentra privada de la libertad desde el 26 de abril de 2022 en la Cárcel del Buen Pastor, por cuenta del Juzgado 4º de EPMS de Bogotá.

Indica que en varias ocasiones de manera verbal y escrita ha solicitado los certificados de cómputo y cartilla biográfica del programa de inducción realizado desde el mes de diciembre de 2022 y han hecho caso omiso a sus solicitudes.

Expone que no tiene copia de los memoriales por cuanto la cárcel no les da recibido ni copia de estos.

Solicita la protección de sus derechos ordenando a la accionada remitir toda la documentación al Juzgado 4 de EPMS de Bogotá para el estudio de la redención de la pena y así solicitar la prisión domiciliaria.

**V. TRAMITE PROCESAL**

Admitida la solicitud, se ordenó notificar a las accionadas solicitándoles rendir informe sobre los hechos aducidos por la petente.

**JUZGADO 4 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.** Informa que la accionante fue condenada a la pena de 53 meses 15 días de prisión por ser hallada responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

Indica que la Reclusión Nacional de Mujeres el Buen Pastor ha remitido la documentación del periodo de julio a septiembre de 2023 y el despacho por auto del 28 de noviembre de 2023 redimió 24 días por estudio.

Que la Reclusión le envió la documentación de octubre a diciembre de 2023, quedando pendiente el certificado de cómputos No. 19066816 que no fue allegado, por lo que requirió a la Cárcel del Buen pastor para que lo remitiera.

Manifiesta que a la fecha la reclusión no ha remitido nueva documentación a efectos de reconocer la redención de la pena a la accionante.

**CARCEL DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA EL BUEN PASTOR** - durante el término concedido para ejercer el derecho de defensa y contradicción guardó silencio a pesar de encontrarse debidamente notificada, por lo que se dará aplicación al artículo 20 del Decreto 2591/91, es decir, que se tendrán como cierto los hechos alegados en el escrito de tutela.

## **VI. PROBLEMA JURIDICO**

Corresponde al despacho verificar si la omisión de respuesta endilgada a la entidad accionada respecto de las peticiones presentadas por la accionante vulnera los derechos fundamentales invocados.

## **VII. CONSIDERACIONES**

**1. La Acción de Tutela.** La tutela es el mecanismo idóneo para que las personas logren el amparo de sus derechos fundamentales que se vean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad o un particular. Sin embargo, este mecanismo es residual y subsidiario, lo que implica que procede en tanto el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para lograr su protección, es decir, la tutela es un mecanismo de amparo, no un proceso contencioso, pues es claro que este mecanismo no fue concebido para que los asociados invoquen procesos alternativos o sustitutivos de los juicios ordinarios o especiales, así que la acción de tutela solo procede cuando no exista otro medio judicial apropiado, o que, existiendo éstos no sean expeditos, idóneos y eficaces, de tal manera que la tutela sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio.

La finalidad de esa acción es lograr que, a falta de vía judicial ordinaria, mediante un trámite preferente y sumario, el Juez ante quien se acuda dé una orden de actuar o abstenerse de hacerlo, tendiente a hacer cesar la vulneración o amenaza de violación denunciada.

El artículo 86 de nuestra Carta magna así lo consagra; también advierte su procedencia contra particulares encargados de la prestación de servicios

públicos o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de indefensión o subordinación.

**2. Los derechos de las personas privadas de la libertad.** La Corte ha señalado que los derechos fundamentales de todo ser humano son universales, inalienables, indivisibles e interrelacionados y, por lo tanto, su goce efectivo debe ser garantizado aun cuando la persona se encuentre pagando una pena privativa de la libertad. Sobre este punto se ha pronunciado en los siguientes términos:

*"1. Los derechos de las personas privadas de la libertad son universales. Sin importar cuál haya sido su crimen o su falta, son seres humanos, y, por ese sólo hecho, la sociedad está comprometida con su defensa. Los derechos fundamentales son universales, de toda persona. Es una posición moral que refleja la decisión social, consagrada por el Constituyente, de respetar el valor intrínseco de todo ser humano. Su dignidad. Es precisamente una de las razones por las que es legítimo sancionar con penas privativas de la libertad a quien comete un crimen: el no haber respetado la dignidad y el valor intrínseco de la víctima a la cual se ofendió y violentó. La sociedad, se diferencia, precisamente, porque no hace lo mismo; no instrumentaliza a ningún ser humano, le reconoce su valor propio; el ser fin en sí mismo. Toda persona vale, a plenitud, en un estado social y democrático de derecho. 2. Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son indivisibles. Todos los derechos, sin importar su tipo, son inherentes a la dignidad de todo ser humano. Negar un derecho, necesariamente, tendrá impacto negativo en los otros; por eso, no pueden existir jerarquías entre ellos. Todos son importantes, todos deben ser respetados, protegidos y garantizados. La cárcel evidencia esa situación. Las negaciones a unos derechos básicos de las personas en prisión implican, necesariamente afectar la dignidad de la persona y, con ello, el sentido y la protección de los demás derechos. Los derechos fundamentales representan un todo; diversas facetas de una misma protección al ser humano. 3. Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad son interrelacionados e interdependientes. Unos dependen de otros. Esto es, además de ser indivisibles y formar un todo de protección, los derechos fundamentales dependen unos de otros. El dejar de proteger el derecho a la alimentación, además de afectar a la dignidad humana, puede traer otras violaciones como afectar la salud, la integridad e incluso la vida. La imposibilidad de educación y de acceso a la justicia, puede desembocar en restricciones ilegítimas e injustificadas a la libertad (por ejemplo, un preso que por no saber leer y por falta de información y de acceso a la justicia, no sabe que tiene derecho a salir de la cárcel desde hace un tiempo)"* (Sent. T-388/13)

Respecto al **derecho de petición**, la jurisprudencia ha dicho *"...De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, "[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales."*

Frente a la procedencia de la acción de tutela para determinar la vulneración del derecho de petición, la H. Corte Constitucional en sentencia T-084/15 sostuvo: *"la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales".* (Resaltado del despacho)

De acuerdo con lo anterior, la Corte ha estimado “*que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo*” (Sentencia T-206/18).

Bajo el anterior panorama, recordemos que por disposición del artículo 23 de la Carta Política el derecho de petición es un derecho fundamental autónomo, cuya protección no depende de la vulneración de ningún otro derecho fundamental, así pues, este operador jurídico considera que la falta de una respuesta efectiva a la solicitud del accionante constituye vulneración al derecho de petición.

En punto al contenido de la respuesta, la Corte ha establecido que las autoridades deben resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y lo que no es permitido es que las respuestas sean evasivas o abstractas, como quiera que condena al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos (Sentencia T-369/13)

**El derecho de petición es, además de un derecho fundamental per se, una manifestación directa de la facultad de acceso a la información que le asiste a toda persona (art. 20 Const.), así como un medio para lograr la satisfacción de otros derechos, como la igualdad, el debido proceso, el trabajo, el acceso a la administración de justicia, entre otros.** (Resaltado del despacho).

El término para resolver las peticiones, por regla general, es de 15 días siguientes a su recepción. Sin embargo, existen algunos casos especiales, como sucede, por ejemplo, en el caso de la solicitud de documentos o información, caso en el cual la solicitud debe resolverse en el término de 10 días siguientes a su recepción; o en el caso de las consultas ante las autoridades, el término es de 30 días siguientes a la recepción, tal y como se señala en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011” (Sentencia T-058/18) – Resaltado del despacho-

## **VIII. CASO CONCRETO**

En el caso *sub judice*, la accionante hace consistir afectación a los derechos fundamentales invocados, toda vez que la accionada Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Bogotá El Buen Pastor no se ha pronunciado sobre sus reiteradas peticiones escritas y verbales de remisión de la documentación a efectos de la redención de la pena.

Encuentra este despacho que el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad mediante proveídos del 15 de marzo y 8 de abril del año en curso ha ordenado oficiar a la Oficina Jurídica del penal con el fin de que remita en caso de existir, los certificados de cómputos por trabajo, estudio y/o enseñanza de la accionante correspondiente a los meses de diciembre de 2022, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024.

De lo anterior se deriva que el establecimiento carcelario no ha dado respuesta ni acreditó de manera alguna haber dado cumplimiento a los requerimientos de la accionante y del Juzgado de EPMS, coligiéndose con ese

actuar que vulnera los derechos de la actora al abstenerse de hacer pronunciamiento a las reiteradas solicitudes.

Es de advertir que la CÁRCEL DE MUJERES EL BUEN PASTOR DE BOGOTÁ omitió en el presente trámite constitucional ejercer su derecho de defensa y contradicción a pesar de haber sido debidamente notificada, por lo que ante su silencio es del caso dar aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, es decir, se tendrán como cierto los hechos alegados en el escrito de tutela, dado que aun cuando la accionante no aporta los escritos petitorios argumentado no contar con ellos por cuanto la Cárcel no les expide recibido ni les da copia, informa igualmente haber presentado peticiones de manera verbal y tales afirmaciones que no fueron desvirtuadas por la accionada.

Por lo tanto y conforme a la jurisprudencia, el derecho fundamental de petición reside en la interposición y su resolución pronta y oportuna de la cuestión, entonces se determina que la vulneración de este se da por la negativa de un agente de emitir respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable, además por no comunicar la respectiva decisión al petente.

Recordemos que el art. 14 de la Ley 1755 de junio 30 de 2015, estableció tiempos claros a las entidades para dar respuesta a las distintas modalidades de petición, consignando 15 días para toda petición, 10 días para documentos e información y 30 días para consultas.

Consigna la normativa que, en casos de requerirse tiempo adicional para remitir la respuesta, ello se haría saber al peticionario. La Corte Constitucional ha precisado que la información ha de ser clara y precisa conforme a lo pedido y resolviendo de fondo la petición así no sea favorable a los intereses del petente, la que ha de ser debidamente notificada. (Sentencia T- 049 de 2009)

Este Despacho considera que en efecto existe vulneración a los derechos rogados, en tanto, según la norma antes citada el término legal con que contaba la entidad para brindar respuesta oportuna sin transgredir los derechos fundamentales de la accionante se encuentra superado, por tanto, no existiendo excusa de omisión de respuesta ni mucho menos prorroga de término, dicho acto conlleva a la afectación de los derechos fundamentales de la tutelante.

Así las cosas, se concederá el amparo de los derechos suplicados por la actora dentro del presente trámite constitucional, toda vez que no se acreditó por la accionada haber dado respuesta y su correspondiente notificación a la peticionaria.

## **IX. DECISION**

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **RESUELVE**:

**PRIMERO: CONCEDER** el amparo de los derechos de la señora **ESTEFANY JULIETH SIERRA GARCIA**, por lo expuesto en precedencia.

**SEGUNDO: ORDENAR a la CARCEL DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BOGOTA EL BUEN PASTOR** para que, por intermedio del funcionario respectivo y en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, procedan a resolver de fondo bien sea positiva o negativamente

las solicitudes que presentara la accionante tendientes a la remisión de la documentación pertinente a efectos de la redención de la pena.

Respuesta que debe ser emitida en los términos indicados en este fallo y dentro de la órbita de su autonomía, es decir, esta sentencia de tutela no sugiere el sentido de la respuesta que se ha de producir, pero la contestación ha de ser de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, decisión que debe notificársele prontamente al peticionario.

**TERCERO: ORDENAR** que, por secretaría, se notifique este fallo a las partes, indicándoles que tienen tres (3) días para impugnarlo.

**CUARTO:** Disponer la remisión oportuna del expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo. **Oficiese.**

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

**WILSON PALOMO ENCISO**

JUEZ

ET

Firmado Por:

Wilson Palomo Enciso

Juez Circuito

Juzgado De Circuito

Civil 012

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d3bbb79e23427ed0bcc47dbf58dd72cab60dec602b284f2505429e03d24bc942**

Documento generado en 23/04/2024 03:56:20 p. m.

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**